

PRIMERO. Denuncia. Mediante oficio CSCJN/DGARARP/DRP/1664/2008 de catorce de julio de dos mil ocho, el Director de Registro Patrimonial hizo del conocimiento de la Directora General de de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la presunta infracción en que incurrió el servidor público *****, a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación contenida en los artículos 8, fracción XV y 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los numerales 50, fracción

XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005, al haber presentado extemporáneamente la declaración de modificación patrimonial, como Asesor, rango F, puesto de confianza, adscrito a la Dirección General de Informática.

SEGUNDO. Inicio de investigación. En acuerdo de uno de agosto de dos mil ocho se tuvo por recibido el oficio al que se hizo referencia en el considerando que antecede, por lo que oficiosamente se tomó conocimiento de los hechos que fueron informados y a fin de contar con los elementos necesarios para determinar una infracción administrativa y probable responsabilidad atribuible a ***** en relación con la presentación oportuna de la declaración de modificación patrimonial, se ordenó abrir el cuaderno de investigación, el cual previas anotaciones que se realizaron en el libro de gobierno de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas se registro con el número **P. R. A. 49/2008** y se ordenó girar oficio a la Dirección General de Personal para que remitiera copia certificada del expediente personal de dicho servidor público, que fue enviado mediante oficio DGP/DRL/286/2008.

TERCERO. Inicio de procedimiento. Una vez integradas las constancias del cuaderno de

investigación **P. R. A. 05/2007** se determinó que existían elementos suficientes para sostener que ***** era presunto responsable de la infracción administrativa prevista en el artículo 131 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 8°, fracción XV, en relación con el diverso 37, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en el artículo 50, fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo Plenario 9/2005, por incumplir la obligación de presentar su declaración de modificación patrimonial en tiempo, por lo que determinó iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del citado servidor público; se registro con el número **P. R. A 49/2008** y se le concedió el plazo de cinco días hábiles para que rindiera el informe previsto en el artículo 134, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el diverso 38 del Acuerdo Plenario 9/2005 y ofreciera las pruebas que tuviera en su defensa.

Dicho acuerdo fue notificado personalmente al servidor público, el cinco de agosto de dos mil ocho (foja dieciocho).

CUARTO. Informe. El trece de agosto de dos mil ocho, (foja diecinueve) se tuvo por rendido el

informe presentado por ***** quien ofreció pruebas e hizo valer sus defensas.

QUINTO. Cierre de instrucción. Por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil ocho (foja doscientos cuarenta y cinco), al encontrarse debidamente integrado el expediente se declaró cerrada la instrucción y se procedió a la elaboración del dictamen respectivo.

SEXTO. Dictamen de la Contraloría. El veinticinco de agosto de dos mil ocho la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dictamen con los puntos resolutivos siguientes:

“PRIMERO. *Se estima que ***** es responsable de la falta administrativa prevista en los artículos 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por incumplimiento de la obligación contenida en el numeral 8, fracción XV y 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como 50, fracción XIX y 51, fracción II, del Acuerdo General Plenario 9/2005.”*

“SEGUNDO. Se propone imponer a ***** la sanción consistente en una **amonestación privada** en términos de lo argumentado en el considerando quinto.

Remítanse los autos del procedimiento de responsabilidades administrativas en que se actúa a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos precisados en la parte final del último considerando.”

Las consideraciones en que se sustenta dicha propuesta de resolución, en síntesis, son las siguientes:

I. La infracción atribuida a ***** consiste en haber omitido presentar oportunamente la declaración anual de modificación patrimonial, ejercicio dos mil siete, dentro del plazo que establece el artículo 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como Asesor, nombramiento respecto del cual los servidores públicos que lo desempeñen están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial, de conformidad

con lo previsto por el artículo 50, fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005.

II. ***** es responsable administrativamente de la falta atribuida, consistente en haber omitido presentar oportunamente su declaración anual de modificación patrimonial, ejercicio dos mil siete, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 50, fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005, los servidores públicos que ocupen una plaza de Asesor tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de los antecedentes que obran en el expediente se advierte lo siguiente:

1. El quince de mayo de dos mil siete, el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia expidió nombramiento a ***** como Asesor, rango F, puesto de confianza, con efectos a partir del primero de marzo de dos mil siete.

2. De la copia certificada en la que consta la declaración de modificación patrimonial

relativa al ejercicio fiscal dos mil siete presentada por ***** el dieciséis de junio de dos mil ocho, se advierte que la misma es extemporánea, esto es que fue presentada fuera del plazo que prevé la referida ley de responsabilidades para cumplir con dicha obligación, si se considera que debió haber hecho su declaración en el mes de mayo y no hasta el dieciséis de junio de dos mil ocho (foja dieciséis del expediente).

3. Por tanto, ***** es responsable de la infracción administrativa que se le atribuye al no haber presentado con oportunidad su declaración anual de modificación patrimonial, ejercicio dos mil siete, como lo ordena el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que el servidor público presentó la declaración respectiva hasta el diecisiete junio de ese mismo año, esto es, fuera del plazo que prevé el artículo 37, fracción III, de la mencionada ley, de ahí que sea evidente que incurrió en la infracción a que alude el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, por incumplir lo dispuesto en el primero de los preceptos citados de la ley de responsabilidades.

En el dictamen se aduce que no son obstáculo para arribar a la conclusión anterior, las defensas esgrimidas a su favor por ***** en el informe rendido en el procedimiento, ya que a juicio de la Contraloría: el servidor público no se no estuvo completamente impedido, física o mentalmente para llevar a cabo la presentación de su declaración patrimonial pues solo estuvo hospitalizado del dos al cuatro de mayo de dos mil ocho, por lo que el periodo de licencia otorgado hasta el quince de junio estuvo fuera del hospital.

III. Al haber encontrado responsable administrativamente a ***** de la falta atribuida, en el dictamen se propone sancionarlo con una **amonestación privada**, toda vez que la conducta en que incurrió no está calificada como grave, además de que en términos generales se observó que era la primera vez que en el órgano interno de control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se instruía un procedimiento disciplinario en su contra; que

dicha infracción no le generó beneficio o lucro, o provocó daño o perjuicio en el patrimonio de este Alto Tribunal, al tratarse de la extemporaneidad o falta de oportunidad en la presentación de la declaración anual de modificación patrimonial, correspondiente al ejercicio dos mil siete.

SÉPTIMO. Trámite del dictamen. El referido dictamen junto con el expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa **49/2008** se remitió mediante oficio CSCJN/DGRARP/DGARA/0469/2008 al suscrito a fin de que resuelva en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 133, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el presente procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en contra de *****, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 133, fracción II, en relación con el 14, fracción XXI, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se trata de un servidor público de

este Alto Tribunal al que se le atribuye una conducta infractora que no está catalogada como grave.

SEGUNDO. Marco normativo que regula el procedimiento. Antes de abordar el estudio del referido dictamen y del procedimiento que le precedió, resulta conveniente precisar que tal como lo señala el artículo 4° del Acuerdo General de Administración 9/2005 para la substanciación y resolución de los procedimientos previstos en este Acuerdo serán aplicables la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en lo que se oponga a lo dispuesto en esta última, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su caso, será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, deberá acudir a los principios generales de derecho, en términos de lo previsto en el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución General de la República, salvo por lo que se refiere a las causas de responsabilidad y sanciones aplicables.

TERCERO. Formalidades esenciales del procedimiento. Por principio, cabe señalar que del análisis del expediente relativo al **P.R.A. 49/2008**, se advierte que se siguieron las respectivas formalidades del procedimiento, en tanto que con motivo del

seguimiento de la evolución de situación patrimonial de los servidores públicos: **1.** El Director de Registro Patrimonial informó que ***** presentó su declaración anual de modificación patrimonial, ejercicio dos mil siete, de forma extemporánea; es decir, denunció ante el órgano competente de la Contraloría la comisión de una falta administrativa con lo que se dio inicio al procedimiento. **2.** Mediante acuerdo de primero de agosto de dos mil ocho (foja catorce) la Contraloría determinó iniciar la investigación respectiva, y agotada ésta, determinó incoar este procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo cual otorgó un plazo de cinco días hábiles para que ***** rindiera su informe respecto de los hechos que se le imputaron y ofreciera las pruebas relacionadas con su defensa. **3.** Dicho proveído se notificó personalmente al servidor público el cinco de agosto de dos mil ocho (foja dieciocho) **4.** El servidor público rindió el informe solicitado y ofreció como pruebas diversas constancias. **5.** El Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el dictamen correspondiente y lo remitió a la Presidencia de este Alto Tribunal.

CUARTO. Probables conductas infractoras.

El presente procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con la denuncia presentada

por el Director de Registro Patrimonial en contra de ***** y, una vez desarrollado dicho procedimiento, la Contraloría de este Alto Tribunal estimó que dicho servidor público es responsable de la infracción administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación contenida en el numeral 8, fracción XV y 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los diversos 50, fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005.

QUINTO. Marco normativo aplicable a las probables conductas infractoras. Para estar en aptitud legal de resolver sobre si ***** omitió cumplir alguna de sus obligaciones relacionadas con el registro de su evolución patrimonial, es imprescindible tener presente el contenido de los preceptos que se estimaron violados en la referida denuncia.

Así, conviene precisar que los artículos 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 8°, fracción XV y 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como los diversos 50,

fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005, establecen:

***“ARTÍCULO 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:
(...)”***

XI. Las previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional...”

***“ARTÍCULO 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
(...)”***

XV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la ley...”

***“ARTÍCULO 37. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:
(...)”***

III.- Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año....”.

“ARTÍCULO 50. Tienen obligación de presentar ante la Suprema Corte declaración de situación patrimonial, bajo protesta de decir verdad, los siguientes servidores públicos:

(...)

XIX. Asesor;...”

“ARTÍCULO 51. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

(...)

III. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, acompañada de una copia de la constancia de ingresos del servidor público y, en su caso, de una copia de la declaración anual del impuesto sobre la renta, si está obligado a presentar declaración en los términos de la legislación aplicable, salvo que en ese mismo año se hubiese presentado la declaración de situación patrimonial a que se

refieren las fracciones I y II de este artículo...".

De lo dispuesto en los artículos que anteceden se desprende que los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tengan el nombramiento de Asesor, están obligados a presentar durante el mes de mayo de cada año, declaración de modificación patrimonial.

SEXTO. Análisis de las conductas infractoras. En el caso de ***** se le atribuye como infracción el haber presentado extemporáneamente la declaración anual de modificación patrimonial correspondiente al ejercicio dos mil siete, con motivo de su encargo como Asesor, por lo que es menester analizar las constancias de autos para determinar si su conducta se ajusta a la hipótesis de responsabilidad administrativa y si, derivado de ello, ha lugar a imponerle alguna sanción o en su defecto, existen causas que justifiquen su actuación y deba relevársele de la misma.

De las copias certificadas del nombramiento de *****, así como de la copia certificada del acuse de recibo de la presentación de su declaración de modificación patrimonial, documentos que corren agregados al presente expediente de responsabilidad

administrativa, se advierte que el quince de mayo de dos mil siete el Presidente de la Suprema Corte de Justicia expidió nombramiento a ***** como Asesor adscrito a la Dirección General de Informática de este Alto Tribunal, con efectos a partir del primero de marzo de dos mil siete, y que el dieciséis de junio de dos mil ocho se recibió extemporáneamente su declaración de modificación patrimonial correspondiente al año de dos mil siete.

De los señalados elementos de convicción, los cuales tiene valor probatorio pleno en términos de lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a este procedimiento se arriba al convencimiento de que:

- ***** se desempeña como Asesor, nombramiento respecto del cual los servidores públicos que lo ejercen se encuentran obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en términos de lo que prevén los numerales 50, fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005.
- La declaración anual de modificación patrimonial correspondiente al ejercicio dos

mil siete, a que alude la fracción III del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, debía presentarse a más tardar el último día del mes de mayo de dos mil ocho y dicho servidor público la presentó hasta el dieciséis de junio del dos mil ocho.

- La declaración anual de modificación patrimonial correspondiente al año dos mil siete fue presentada extemporáneamente por lo que ***** se ubicó en la hipótesis de responsabilidad administrativa prevista en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al no haber cumplido con la obligación que le impone el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de presentar con oportunidad las declaraciones de situación patrimonial.

De esta suerte, se pone de manifiesto que dicho servidor público al ejercer su encargo como Asesor, se abstuvo de presentar dentro del plazo señalado por la ley, la declaración respectiva, por lo que al existir la obligación de presentar una declaración

patrimonial de esa naturaleza para los servidores públicos de su categoría y funciones y no haberlo hecho así, es evidente que incurrió en la falta administrativa que se le atribuyó.

En tal virtud, se considera que como lo concluyó la Contraloría de este Alto Tribunal en el dictamen emitido en este procedimiento de responsabilidad administrativa, ***** se ubicó en la hipótesis de responsabilidad administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, precisamente por incumplir con la obligación de presentar su declaración de modificación patrimonial en tiempo, prevista en los diversos 8, fracción XV y 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como con los diversos 50, fracción XIX y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005.

SÉPTIMO. Responsabilidad. Al existir la infracción administrativa que se atribuyó a ***** es menester analizar si, dicha circunstancia trae aparejada la imposición de una sanción en su contra o si, por el contrario, existen causas que lo justifiquen y, por ende, debe relevársele de aquélla.

Lo anterior es así, porque sin desconocer de manera alguna la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que les asisten a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para concluir si una falta administrativa debe ser sancionada es indispensable tomar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión tal como lo reconoce el legislador en el artículo 37, párrafos noveno y décimo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme al cual tratándose de la omisión en la presentación de la declaración patrimonial de inicio de encargo, es menester analizar si la falta respectiva encuentra alguna causa de justificación.

En los citados párrafos del numeral 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se dispone:

“Artículo 37. (...) Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se suspenderá al infractor de su empleo, cargo o comisión por un periodo de quince días naturales...”

En caso de que la omisión en la declaración continúe por un período de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere sido suspendido el servidor público, la Secretaría declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de la dependencia o entidad correspondiente para los fines procedentes. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración a que alude la fracción III...

De lo dispuesto en este numeral, aun cuando el supuesto que prevé se refiere a la omisión de la presentación inicial y no a la anual de modificación patrimonial se estima que, si ante aquella omisión, la legislación prevé que es factible analizar la existencia de alguna causa justificada, por igualdad de razón, ante una presentación de la declaración anual fuera de plazo previsto para esos efectos, debe estudiarse la existencia o no de una causa de esa naturaleza.

En ese orden de ideas, atendiendo a la voluntad del legislador en cuanto a valorar la posible justificación de una falta administrativa relacionada con la presentación de una declaración patrimonial, debe evitarse actuar con un rigorismo a ultranza

imponiendo fatalmente sanciones cuando se constate una extemporaneidad en el cumplimiento de una obligación de esa naturaleza, sin que previamente se analicen las características particulares que reviste el caso concreto, pues un prurito de esa índole equivaldría a soslayar el incontrovertible hecho de que pudieran existir situaciones excepcionales que justifiquen plena o parcialmente la conducta respectiva.

En ese tenor resulta conveniente analizar lo que el servidor público argumentó como defensas en el informe dirigido a la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría, del que se desprende:

() ... “Si bien omití presentar la declaración de situación patrimonial en el mes de mayo último, e incluso el dos de junio que fue la fecha límite para realizar dicha obligación, también lo es que en mi incumplimiento hubo culpa, ya que ese no actuar se generó por mi mal estado de salud como se advierte de las copias certificadas de licencias medicas de mi incapacidad que anexo al presente, documentales que ofrezco como pruebas de mi parte.

... () “Cabe resaltar que en el periodo del seis de mayo al quince de junio de dos mil ocho, gocé de

incapacidad medica por que el día dos de mayo de dos mil ocho, de forma inesperada y urgente tuvieron que intervenirme por segunda ocasión.”

Incluso, destaca que en el informe emitido por el médico especialista en ortopedia y traumatología doctor *****, de fecha cinco de mayo de dos mil ocho, que el funcionario acompaño a su informe, se señala:

“ Se trata de un paciente masculino de 33 años de edad, sin antecedentes de importancia para el padecimiento actual, el cual inicia en noviembre de 2007 al sufrir accidente automovilístico, recibiendo trauma directo en hombro izquierdo, fue tratado quirúrgicamente con Reducción Abierta y Fijación Interna de Fractura de Clavícula Izquierda, actualmente cursa con dolor intenso a nivel del hombro izquierdo y limitación funcional, acudiendo a Urgencias del Hospital Ángeles de México y después de valoración clínico radiográfica se integra el siguiente diagnóstico:

“Fue tratado quirúrgicamente el día 2 de mayo del presente, con retiro de material de Osteosíntesis, Reducción abierta y fijación Interna y colocación de Injerto Óseo Liofilizado, es dado

de alta para ser valorado en la consulta externa de ortopedia, con antibiótico (Keflex), AINE (Excel) y Analgésico (Rapix)...()

Además, el servidor público ofreció como medio de prueba diversas constancias médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en las que se advierte que durante todo el mes de mayo y parte del mes de junio estuvo incapacitado por prescripción médica (fojas 27 a la 32 del expediente). ¹

Precisado lo anterior debe tomarse en cuenta que si bien la declaración de modificación patrimonial debe presentarse durante el mes de mayo de cada año, es importante destacar que en el computo del plazo respectivo no deben tomarse en cuenta los días en que un servidor público goza de licencia por incapacidad expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que la presentación de la respectiva declaración patrimonial no se limita al simple hecho de acudir ante la Contraloría de este Alto Tribunal o incluso remitir el documento correspondiente por medios electrónicos, sino que conlleva una serie de actividades que implican recabar diversa documentación y realizar un

¹ Licencias médicas por incapacidad correspondientes al expediente médico 28081 del servidor público *****, con números de serie: 091LM7463753, 091LM7461116, 091LM7461269, 200LM7897438, 200LM7897496, 200LM7933665.

análisis detenido con el fin de dar sustento a los datos plasmados en la declaración patrimonial.

Por ende es necesario que el servidor público respectivo goce de un estado de salud que no le impida realizar debidamente la referida declaración, de donde se sigue que la circunstancia de que se encuentre menguada su salud de forma tal que el Órgano del Estado competente para tales efectos le expida una licencia por incapacidad, es suficiente para que los días cubiertos por ésta no sean computables dentro del plazo para rendir una declaración patrimonial.

En ese contexto, si en autos obran sendas licencias por incapacidad expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado respecto de *****, en virtud de las cuales se determina su imposibilidad física para laborar los días del seis de mayo de dos mil ocho al quince de junio de dos mil ocho, debe estimarse que esos días no deben computarse para pronunciarse sobre su responsabilidad en la presentación extemporánea de su declaración patrimonial de modificación patrimonial correspondiente al ejercicio de dos mil siete, la cual presentó hasta el dieciséis de junio de dos mil ocho.

Al respecto, conviene recordar que por mandato legal la referida declaración debe presentarse en el mes de mayo de dos mil ocho, lo que conlleva la clara voluntad del legislador de otorgar a los servidores públicos el plazo de treinta y un días naturales para cumplir con esa obligación, por lo que para reprochar administrativamente a un servidor público no cumplir con aquélla oportunamente, es necesario verificar que efectivamente haya contado con el plazo legalmente previsto para ello.

Por tanto, con base en las referidas documentales públicas, a las que corresponde valor probatorio pleno, en términos de lo establecido en los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se impone concluir que de los treinta y un días naturales de los que gozó ***** durante el mes de mayo de dos mil ocho para presentar su declaración de modificación patrimonial no deben considerarse los días del seis de mayo al quince de junio de dicho año, ya que durante esos días se encontró imposibilitado por cuestiones de salud para laborar y, por ende, para formular la respectiva declaración patrimonial.

En consecuencia, el plazo para presentar la declaración respectiva en el caso concreto transcurrió del primero al cinco de mayo y reinició el dieciséis de

junio de dos mil ocho, una vez concluida la licencia por incapacidad médica otorgada a *****.

En ese orden de ideas si la declaración respectiva se presentó el día dieciséis de junio de dos mil ocho, debe estimarse que su extemporaneidad no es reprochable administrativamente a *****.

Cabe agregar que no obsta a esta conclusión el hecho de que las actividades para elaborar la declaración respectiva puedan iniciarse antes del mes de mayo, ya que aun cuando ello sea indiscutible lo cierto es que legalmente todo servidor público debe contar con el plazo equivalente al mes de mayo para formular dicho documento.

Por lo expuesto, aun cuando se acreditó que ***** se ubicó en la hipótesis de infracción administrativa ya que no presentó su declaración patrimonial correspondiente al ejercicio patrimonial dos mil siete durante el mes de mayo de dos mil ocho, debe estimarse que probó la existencia de causas justificadas que le impidieron su presentación oportuna por lo que se estima que se le debe relevar de responsabilidad administrativa por la comisión de dicha falta y, por tanto, no existe motivo para sancionarlo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO Conforme a lo expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución ***** no es responsable administrativamente de la falta materia de este procedimiento.

Devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal, a efecto de que notifique personalmente esta determinación al servidor público sujeto al procedimiento y, en su oportunidad, lo archive como totalmente concluido.

Así lo resolvió el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa con el licenciado Luis Grijalva Torrero, Secretario Ejecutivo de la Contraloría de este Alto Tribunal que da fe.